

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 30 º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-9930-2020
CARATULADO : SOMORROSTRO/CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO

Santiago, tres de Enero de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha 24 de junio de 2020, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira , abogado, con domicilio en Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna y ciudad Santiago, en representación, de don **Raúl Guillermo Somorrostro Poblete**, chileno, casado, trabajador dependiente, domiciliado en calle Calafquén N° 667, Villa Millaquén, comuna de Quilicura, e interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Sostiene que don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, con el número 23.555.

Señala que, acaecido el Golpe Militar, el 20 de octubre de 1974, su representado fue tomado detenido por personal militar desde su lugar de trabajo, la empresa Panal S.A., ubicada en Panamericana Norte N° 550, en la comuna de Renca, por orden del Coronel Jorge Almazabal y de los señores, que pertenecían a la empresa, Raúl Dastres, gerente administrativo, Roberto Azu, jefe de personal y Francisco Mancilla, jefe de estampería, y llevado al regimiento Tacna, el que estaba -y sigue estando- ubicado en la calle Blanco Encalada.



Indica que fue sacado esposado de la empresa y llevado al regimiento antes mencionado, despojado de todas sus pertenencias, incluyendo su dinero, un reloj marce Denis, una cadena de oro y su argolla de matrimonio. De todas ellas, solo le devolvieron su argolla.

Agrega que el lugar donde le tuvieron detenido, era una celda muy pequeña, que la única manera de estar era encogido o hincado. Los interrogatorios a los que fue sometido eran con golpes de puño, con fuertes patadas y con golpes de corriente.

Menciona que la aplicación de corriente lo hacían dos veces por día, durante una a dos horas por sesión, en todo su cuerpo, mojándole de manera previa. Esto duró 15 días más menos.

Luego fue trasladado a Tres Álamos. Allí los interrogaban utilizando más corriente eléctrica que golpes de puño.

Por su parte, en Villa Grimaldi fue solamente interrogado una vez con aplicación de corriente, sobre lo que se denomina la parrilla. Allí permaneció cuatro días.

Manifiesta que, desde su detención hasta llegar a Villa Grimaldi, sus ojos permanecieron con scotch y una venda negra. Cuando era trasladado a Tres Álamos, a libre plática en Av. Vicuña Mackenna con Departamental, le quitaron la venda y el scotch. Tanto fue el impacto que desde ese mismo momento quedó con la visión altamente mermada.

Arguye que en Tres Álamos, el día domingo 5 de diciembre de 1974, después de la única visita que tuvo de sus familiares, recibió un fuerte golpe contra la muralla que separaba a los incomunicados con los de libre plática, y quedó con tec cerrado. En una ambulancia de Carabineros lo trasladaron al Hospital de Carabineros, donde fue rechazado por estado de gravedad; le salía sangre de la boca, oídos y narices. Por eso, lo llevaron al Hospital Militar, donde también fue rechazado, de modo que optaron por llevarlo a la Posta Central. Al ingresar a la posta había un médico, cirujano amigo, quien solicitó su traslado en forma urgente al cuarto piso que correspondía a la unidad



de cirugía. Durante los tres días de hospitalización, estuvo custodiado por Carabineros, y lo mantuvieron esposado de pies y manos.

Denota que el día 6 de enero de 1975, su primo Francisco Vera P., quien trabajaba en el Círculo Francés, ubicado en calle Londres N° 57, en Santiago, recibió una llamada de la Posta Central, comunicándole de su estado de salud que era de suma gravedad. Le dijeron también, que Carabineros lo había baleado.

Indica que sus familiares lo visitaron el domingo 12 de enero de 1975, y el carabinero que estaba a cargo de los de libre plática le informó a su esposa que él había tratado de escapar, y que nuevamente había sido entregado a la DINA. En ese mismo momento, su esposa fue a la Posta Central pero no le dieron ninguna información de su estado de salud, y mucho menos de su nuevo paradero, ya que fue trasladado por personal militar en un jeep, a Quinteros, Ritoque. Añade que, debido a la gravedad de su estado de salud, el médico tratante les entregó un certificado indicando que debía ser atendido día por medio en el Hospital de Valparaíso durante dos meses, acompañado de hecho, por el señor Daniel Vergara, ex Secretario General de Gobierno, que se encontraba detenido y en muy mal estado de salud.

Refiere que al momento de su detención pesaba 70 kilos, y al ser trasladado a Ritoque, ya pesaba 53 kilos, lo cual le provocó un deterioro de su salud física y moral.

Agrega que desde el día 12 de enero de 1975, su esposa no supo más de su paradero. Ella agotó todos los recursos para encontrarlo. Lo buscó en hospitales, en cementerios, comisarías y cuarteles militares.

Manifiesta que el día 4 de mayo de 1975 fue dejado en libertad. Al llegar a su hogar, se encontró con su familia en tal estado de deterioro físico, moral y económico que sus sentimientos en esos momentos fueron de una impotencia, pues, notó, que no solo él fue perjudicado, sino también su familia padeció un verdadero infierno durante todos esos meses.



Hace presente que desde 1975 hasta el año 1985, vivió momentos extremadamente difíciles, por los daños físicos, morales y económicos, los que, en todo caso, perduran hasta el día de hoy.

Expone que algunos de los perjuicios más evidentes en su persona fueron la fractura de su nariz; la pérdida de trabajo sin derecho a indemnización; su dentadura fue dañada a tal punto que debe usar prótesis; sufre de reiteradas jaquecas por lo que se encuentra en tratamiento médico; su sistema nervioso se encuentra dañado, y prueba de ello son sus manos y uñas; sufre de hemorragias nasales con fuertes dolores de estómago y vómitos; al estar mucho tiempo de pie sufre calambres, sin embargo, al estar sentado tiene dolores de espalda, riñones y adormecimiento de sus piernas, y lo han hospitalizado dos veces por fuertes taquicardias en la Clínica Central. Finalmente, señala que le duele, y le pesa el sufrimiento de su familia, especialmente el de su señora, quien perdió también toda su dentadura por causa del sistema nervioso, y por la falta de alimentación adecuada, ya que su situación económica era bastante precaria.

Señala que los lugares donde estuvo detenido su representado, se caracterizan hoy, ya desde una visión histórica, por los tratos inhumanos que allí se proferían a los prisioneros.

Indica que, entre los fundamentos de hecho que sustentan esta demanda, se encuentran los daños físicos y materiales que sufrió, y por sobre todo, el daño moral directo derivado de a lo menos, las siguientes circunstancias que rodearon la detención y el sometimiento a tratos crueles e inhumanos en contra de su mandante, y que en mayor o menor medida se dieron en este caso particular: a) Daño Mental; b) Amenazas; c) Incomunicación; d) Persecuciones; e) Negativa de acceso a la información; f) Inseguridad; g) Presiones y daños psicológicos; h) Alteraciones del sueño; i) Neurosis de angustia, con secuelas de enfermedades psicosomáticas; j) Aislamiento Social; k) Otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones



forzadas de largo tiempo; l) Derechos Humanos conculcados en toda su amplitud.

Refiere que el artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Destaca que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del Derecho público.

Alude que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual obliga y es fuente de responsabilidad para el Estado de Chile.

Agrega que el Estado de Chile, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), así como reconociendo el Derecho Internacional imperativo o *ius cogens* ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden al deber general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los



Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Agrega que todo lo anterior, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Se trata en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Por lo tanto, aduce que la Constitución reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5 inciso 2º, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.



Por último, establece que el artículo 19 N° 20 de la Carta Fundamental indica que “La Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas”.

Hace presente que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. *A contrario sensu*, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto –como es fácil comprender – se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Al respecto, indica que puede revisarse los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, referidos a la obligación de cumplir los convenios, y a la imposibilidad de invocar reglas de derecho interno para incumplir un tratado.

Invoca, por su lado, un conjunto de razones de texto para sostener que el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada considera que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado destinada a torturar, exterminar y/o hacer desaparecer a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil, se tiene que reconocer que dicha norma fue



diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste, referido a la aplicación sistemática de la tortura, el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional;

2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (artículo 2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (artículo 2321); edificios en ruinas (artículo 2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (artículos 2326 y 2327). Agrega que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, más aún es contraria al Derecho Internacional pues permite la exculpación estatal ante tales crímenes.

Por otro lado, sostiene que la materia de autos quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas- implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, precisa que en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona –derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder



ante la comunidad internacional, y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Por su parte, añade que la Convención Americana –tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio, por la vía del artículo 5 inciso 2º, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Indica que, si bien por un lado es efectivo que en ninguna disposición expresa de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo, y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se encuentra establecido en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que: “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas”. [Tales] principios generales del Derecho [...] reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos. (Cfr. E. Corte Suprema, 14.10.2009, “López con Fisco de Chile”, Rol Nº 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo, considerando Nº 18).

De otra parte, arguye que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que su representado vivió en carne propia.

Hace presente que el daño moral es aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o



espirituales de una persona, esto es, un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Añade que esta forma de conceptualizar el daño moral es consistente con los sentidos dados por la doctrina chilena y la jurisprudencia (nacional e internacional).

Agrega que, la doctrina más moderna, ha expandido el concepto de daño moral a “una lesión de cualquier interés cierto y legítimo de la víctima de contenido no patrimonial”. En doctrina más reciente, don Enrique Barros Bourie sobre la base de la jurisprudencia nacional, ha conceptualizado el daño moral como el dolor físico, la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar una buena vida.

Así, la categoría de daño corporal expresa adecuadamente la protección de los importantes e inapreciables bienes de la vida humana y de la integridad física y psíquica de la persona.

Ahora bien, respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio, en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Esto mismo, pero explicado mediante un ejemplo suena así: desde el momento cuando ya se tiene por probado que una persona perdió su vida, fue torturada, o vio lesionada su libertad individual o su seguridad personal por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso los más cercanos a la víctima –piénsese, a modo ilustrativo, en su cónyuge, sus hijos o sus padres- habrán resultado ilesos en su fuero interno –sus afectos y emociones- luego de los delitos cometidos. Por eso es que para un sector importante del foro judicial, al cual adhiere este libelo pretensor, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego entonces se infiera -como consecuencia necesaria- el daño sufrido con ocasión del hecho ilícito cometido.



Denota que, como víctima directa y reconocida de tortura mediante un Informe Oficial, debiese presumirse el daño moral.

Colige que, es comprensible que un demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la judicatura alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado, porque es un daño verdaderamente irreparable.

No obstante, los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran.

En mérito de lo expuesto y de las normas jurídicas citadas, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado al pago de la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete, por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado y ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Con fecha 7 de septiembre de 2020, se notificó la demanda al Fisco de Chile.

Con fecha 25 de septiembre de 2020, la parte demandada contesta la demanda, solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

I.- Excepción de Reparación Integral



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSYNXDMXRB

Como primera defensa, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor.

Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Sostiene que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Sostiene respecto a las reparaciones mediante transferencias de dinero, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, que el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.



Señala que el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus respectivas modificaciones. De este modo, se estableció una pensión anual de reparación, y otorgó beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas, estableciendo una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación, en conformidad a la Ley N° 20.874 por la suma de \$1.000.000.

Además, refiere que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Hace presente que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSYNXDMXRB

requerimiento de salud de los beneficiarios. Asimismo, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Afirma que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Asimismo, manifiesta que, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de derechos humanos, se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Colige que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Manifiesta que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos, como el cúmulo de reparaciones antes indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

II.- Excepción de prescripción:

Asimismo, el demandado opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSYNXDMXRB

artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indica que conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió don Raúl Somorrostro Poblete, ocurrió a partir del 20 de octubre de 1974 por agentes del Estado en diversos centros de detención y tortura.

Sostiene que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 7 de septiembre de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público, estando consagrada en las normas del Título XLII del Código Civil, y en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho



privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Indica que debe considerarse que, en la especie, se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Para ello, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercido oportuno de las acciones.

En relación con las alegaciones expuestas por el actor, en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, afirma:

1.- Respecto a la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por



estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

2.- Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

3.- La Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, la cual se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no se podría extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

4.- La Convención Americana de Derechos Humanos, que no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Afirma el demandado que, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley



interna al resolver esta contienda, y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

III.- En cuanto al daño e indemnización reclamada:

Señala que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Expone que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral (\$150.000.000), resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Continúa su defensa, señalando que en subsidio de las alegaciones opuestas, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor del Estado, como las reparaciones satisfactivas, y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.



Manifiesta respecto a los reajustes e intereses demandados, que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora, si no cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Reitera que en el hipotético caso de que se acoja la acción de autos y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos, y, en definitiva, conforme a las excepciones y defensas opuestas, rechazar la demanda en todas sus partes, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 28 de octubre de 2020, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica.

Respecto a excepción de “reparación integral” advierte que, en el mejor de los casos, los montos que otorgan las leyes invocadas por la demandada sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre los años 1973 a 1990. En ningún caso esa clase de pensiones reparan de manera integral el dolor experimentado por el demandante, en su calidad de víctima directa de la prisión política y las torturas relatadas en su libelo pretensor.

Agrega que hasta el día de hoy ningún tribunal de la República ha fijado en el caso específico de don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete el monto de la reparación que tendría derecho a recibir. De modo entonces que, en rigor, no existe a su favor un crédito líquido y exigible en la actualidad.



Denota que la Ley N° 19.123 que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”, lo que no es sinónimo de reparar y, en el caso del demandante, aun no se le han reparado de manera integral (hasta el día de hoy) las secuelas que él padece como consecuencia de sus días de privación de libertad y de los apremios a los que fue sometido.

Refiere que la Ley N° 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”). Entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión, como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, deviene en insostenible aquella excepción de reparación integral invocada por el Fisco de Chile.

Añade que el sentimiento de injusticia y de no haber sido compensado ni reparado ni indemnizado, subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy. La Ley N° 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”).

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva de la acción, arguye que, desde una perspectiva jurídica, resulta insostenible afirmar que las únicas reglas que hoy existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil.



Agrega que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por los tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos.

Apunta que la alegación contraria resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración, reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales, y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sub lite.

Sostiene que el aserto de la demandada es errado por varias razones:

- La acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado no establece plazo de prescripción (artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República).
- El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos.

Agrega que el sostener que el caso de autos está prescrito es una equivocación jurídica, toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones



civiles con las penales, esto es, que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

En cuanto al monto demandado, y reajustes, intereses y costas, se remite a lo consignado en la demanda.

Con fecha 10 de noviembre de 2020, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, ratificando las argumentaciones expresadas en el escrito de contestación, teniéndolas por expresamente reproducidas y conforme a ello, solicita el rechazo de la demanda.

Destaca que la Ley 19.992 tuvo un fin reparatorio, ya que en caso contrario, no tendría otra explicación el pago que se otorga a determinadas personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura. Dicho mecanismo indemnizatorio establecido por la ley, es sin duda, especial y trasunta un sistema que el Estado asumió voluntaria y directamente en favor de estas personas, para la reparación de daños morales.

Agrega que, por lo anterior, es excluyente de otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la ley sólo la hace compatible con otras pensiones. Ello determina que la indemnización demandada sea improcedente, por ser incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado todo lo cual constituye una excepción de pago, y no solo una incompatibilidad.

Refuta que todas las alusiones al término reparar no implican indemnizar, no resultan argumentos sólidos, pues claramente al pagarse dinero, se les confirió una indemnización por la vía legal, la que fue aceptada por el actor.

Así, hace presente que el demandante se encuentra en una situación especial por todos los beneficios compensatorios del daño moral como son el Programa de salud PRAIS, beneficios educacionales, etc. y la pensión vitalicia que solo tiene como causa el reparar el daño moral sufrido, y no es una pensión meramente asistencial, porque si bien existen las pensiones asistenciales, ellas tienen como fuente el cubrir otras necesidades sociales a las personas



que se encuentran en estado de indigencia, situación totalmente distinta a la pensión otorgada al demandante.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, refiere que, desde hace más de diez años la Excma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil, que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado.

Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

También la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil (en este sentido, Corte Suprema Rol N° 10.665-2011, 21 de enero de 2013; Rol N° 4753-2001 de 15 de mayo de 2002).

Con fecha 4 de diciembre de 2020, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Nelson Caucoto Pereira, en representación de don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete, interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, en calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, todos ya individualizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEGUNDO: Que la parte demandada contestó el libelo, pidiendo su rechazo, al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSYNXDMRXB

TERCERO: Que se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto de los cuales debía recaer la prueba, los siguientes:

1.- Efectividad que el demandante ha sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios.

2.- En su caso, efectividad de que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada.

3.- Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados.

4.- Efectividad que el demandante fue reparado por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva.

CUARTO: Que a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó los siguientes documentos en autos:

1. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con fecha 23 de diciembre de 2019, que certifica calificación de víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, de don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete.
2. Certificado de nacimiento de don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete.
3. Sentencia del caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre del 2018, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

QUINTO: Que asimismo, la parte demandante pidió oficiar a las instituciones que se señalarán, a fin de que informaran todo antecedente de daños o secuelas dañosas, afectivas, sentimentales, emocionales, psicológicas y mentales, que los hechos y experiencias relatadas, hayan dejado en las vidas de los prisioneros torturados durante el régimen militar:



1. Fundación Archivo de la ex Vicaría de la Solidaridad, cuya respuesta fue allegada a folio 16 y los documentos remitidos, custodiados bajo el N° 2529-2020.
2. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, sobre el informe intitulado “Víctimas de violaciones de derechos humanos: situaciones represivas y experiencias traumáticas”, agregado a folio 15.
3. Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, que remite “Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Período 1973-1990” de este Ministerio, agregado a folio 15 y 21.
4. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, (FASIC) sobre “La Tortura”, Modelo de Intervención, agregada a folio 10.

SEXTO: Que por último, la demandante ofreció prueba testimonial, consistente en las declaraciones de don Omar Óscar Umaña Urrutia, don Carlos Moisés Morgado Cisternas y don Patricio Omar Matus Vásquez, brindadas en audiencia llevada a cabo con fecha 26 de julio de 2022, rolante a folio 58.

SÉPTIMO: Que por su parte, la demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS), a fin de que informase todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que haya obtenido don Raúl Somorrostro Poblete, cuya respuesta figura evacuada a folio 33.

OCTAVO: Que son hechos pacíficos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que el 20 de octubre de 1974, don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete fue detenido por personal militar en su lugar de trabajo, empresa Panal S.A., siendo trasladado al Regimiento Tacna, lugar en que permaneció quince días.



2.- Que posteriormente fue trasladado a Tres Álamos, a Villa Grimaldi –donde permaneció por cuatro días-, nuevamente a Tres Álamos. Posteriormente fue conducido a Ritoque, Quintero.

3.- Que el 4 de mayo de 1975, el Sr. Somorrostro Poblete fue puesto en libertad.

4.- Que durante todo el tiempo que permaneció como prisionero político, fue objeto de apremios físicos, psicológicos y torturas de diversa entidad.

5.- Que el actor ha sido reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número de registro 23.555.

NOVENO: Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido en su calidad de víctima de prisión política y tortura durante el régimen militar.

En consecuencia, junto con analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión del actor, es procedente referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, las que se circunscriben a la reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor y a la prescripción.

DÉCIMO: Que, en efecto, alega la demandada que el actor ya se encontraría indemnizado de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

UNDÉCIMO: Que conforme a lo informado por el Instituto de Previsión Social, documento allegado a folio 33, efectivamente consta que el Sr. Raúl Guillermo Somorrostro Poblete ha recibido como reparación, al mes de febrero de 2021, la cantidad total de \$41.854.691, siendo su pensión actual de \$186.258.



DUODÉCIMO: Que las transferencias de dinero realizadas al actor, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no conllevan –necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por el actor en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

En el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos*



humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley” (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado, sin perjuicio de tener presente el hecho al momento de fijar el monto de la eventual indemnización.

DÉCIMO TERCERO: Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.

DÉCIMO CUARTO: Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se sujeta a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal controversia –y la postura que se adopte- no resulta fútil. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que el actor pudo ejercer la acción. A la inversa,



de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

DÉCIMO QUINTO: Que para zanjar tal problemática, es necesario considerar que si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa, conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a



que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

DÉCIMO SEXTO: Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno,...”* (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta magistrada se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que don Raúl Somorrostro Poblete demanda indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la prisión política y torturas de que fue objeto entre el 20 de octubre de 1974 y el 4 de mayo de 1975, por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, siendo incluso calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados.

Luego, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por el actor.

DÉCIMO OCTAVO: Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter



inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

DÉCIMO NOVENO: Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, desde que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

VIGÉSIMO: Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el actor -sino únicamente la procedencia o cuantía de la suma pedida a su respecto-, la parte demandante rindió prueba testifical, prestando declaración tres personas, las que convergen en los hechos que envolvieron la detención de don Raúl Somorrostro, y las secuelas que derivaron en su persona, a raíz de las torturas que padeció.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que efectivamente, el testigo don Omar Umaña Urrutia refiere que conoce a Raúl Somorrostro por haber sido compañeros de trabajo y porque él también estuvo detenido en Tres Álamos, lugar al que llegó el actor, quien no se veía en buenas condiciones físicas, ya que todo el que caía preso en esos años era torturado.

Indica que después veía al demandante con problemas en el trabajo, tenía que ir a médico por problemas de ansiedad.

Precisa que las personas que estuvieron detenidas tienen problemas que arrastran hasta la actualidad, les cambió la vida siendo jóvenes, tenían muchas ilusiones y esto quedó estancado. Cuando conversa con el actor, le dice que ello, le produce tristeza y ansiedad.

Por su parte, don Carlos Morgado Cisternas depuso que era compañero de trabajo de Raúl Somorrostro, que estaban en la



empresa cuando a él se lo llevaron detenido en 1974, e incluso le avisó a su mujer de la detención.

Precisa que con la experiencia que vivió el actor cambió su forma de ser, perdió la alegría, ya no era el líder para organizar actividades, incluso después no participó más.

Por último, don Patricio Matus Vásquez sostiene que conoció a Raúl Somorrostro jugando a la pelota en Renca el año 1972. Agrega que el 2000 se reencontraron en un trabajo, y que cuando lo volvió a ver ya no era el mismo Raúl, pues estaba más lerdo, ido, se le olvidaban las cosas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que a partir de estos antecedentes, es dable colegir que la vida del actor, producto de la prisión política y torturas de que fue objeto, sufrió un vuelco, presentando incluso actualmente, más de cuarenta y ocho años después de los infaustos sucesos, secuelas de corte psicológico, recuerdos intrusivos; en definitiva, sentimientos de desesperanza, y de impotencia, que han alterado y alteran sus expectativas de vida personal y de su entorno familiar, también golpeado por este episodio inolvidable.

VIGÉSIMO TERCERO: Que correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por el actor, y considerando el tiempo que permaneció privado de libertad, las secuelas psicológicas que aún se mantienen en el tiempo y el monto reparatorio ya recibido por parte del Estado de Chile, este será estimado en la suma de \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).

VIGÉSIMO CUARTO: Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, mientras que los intereses corrientes se devengarán desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

VIGÉSIMO QUINTO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.



Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.

II.- Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida, y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a don Raúl Guillermo Somorrostro Poblete la suma de \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos) a título de daño moral.

III.- Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, y devengará intereses corrientes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

IV.- Que no se condena en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese.

RoI C-9930-2020

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, juez titular.

En Santiago, a tres de Enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSYNXDMRXB